

ALGUNAS CUESTIONES PROCESALES PROBLEMÁTICAS DEL CONCURSO DE ACREEDORES¹

FAUSTINO CORDÓN MORENO
Catedrático de Derecho Procesal
Universidad de Alcalá

Resumen: El legislador ha judicializado plenamente el concurso, excluyendo la solución de los problemas de insolvencia –o de algunos de ellos– fuera del proceso, y ha atribuido la competencia para conocer de él a unos jueces especializados, los Jueces de lo Mercantil, cuya justificación es discutible. El trabajo analiza ambas cuestiones. En primer lugar, la delimitación de las competencias de estos órganos judiciales y el régimen de su control, poniendo de manifiesto los desaciertos y las lagunas, que han dado lugar, en la práctica, al planteamiento de problemas de delimitación, en especial, en los casos de acumulación de acciones. Y también el propio instrumento procesal y las normas que para su agilización están previstas en la Ley Concursal, en especial en su Título VIII, resaltando que este objetivo –la “más pronta, eficaz y económica tramitación” del concurso– no se ha alcanzado en la práctica.

Palabras clave: Jueces de lo mercantil: Jurisdicción y Competencia. Proceso concursal. Agilización del procedimiento. Sistema de recursos. Principios de universalidad y proporcionalidad.

Abstract: The legislature has completely judicialized bankruptcy proceedings, thus eliminating the possibility of solving insolvency problems –or at least some of them– outside such procedures, and has assigned jurisdiction over such to specialized judges (the Commercial Judges), whose justification is of questionable merit. The paper discusses both issues. First, the setting of jurisdictional boundaries for these judicial bodies and the oversight/control regime for such, highlighting the failures and shortcomings which have brought about, in practice, jurisdictional competence demarcation problems, especially in cases where there is a joinder/consolidation of

¹ Texto de la conferencia pronunciada en la Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá el 2 de julio de 2009, en el que sólo he introducido correcciones de estilo que venían exigidas por el destino del original a su exposición oral.

bankruptcy actions. Also considered are the actual procedure itself and the procedural streamlining rules provided in the Bankruptcy Act, especially those in Chapter VIII. The paper notes that the goal of this law –the “most timely, effective and economical resolution” of proceedings– has not been achieved in bankruptcy practice.

Keywords: Commercial Judges: Jurisdiction and Competence. Bankruptcy proceedings. Streamlining of proceedings. Appeals system. Principles of universality and proportionality.

1. El concurso es un instrumento judicial –un proceso– previsto por el ordenamiento jurídico para la solución ordenada del problema que para los acreedores representa la insolvencia del deudor común (en definitiva, de las situaciones de crisis empresarial). En el momento actual debe tener presente la realidad que viene impuesta por una sociedad y una economía globalizadas: las situaciones de crisis a las que debe hacer frente no son solo las del comerciante individual o de la pequeña o mediana empresa que desarrollan su actividad exclusivamente en el ámbito local o nacional, sino también las de las grandes sociedades y de los grupos de sociedades de la economía global, que afectan a acreedores y a bienes de distintos países. Esta realidad hace necesario prever normas uniformes que permitan afrontar las situaciones de crisis empresarial de ámbito supranacional y aportar soluciones a los problemas que plantean con criterios también uniformes, en especial cuando los países involucrados se encuentran inmersos en un proceso de unión –por ahora básicamente económica–, como es el caso de los que integran la Unión Europea. Esta preocupación por la búsqueda de criterios uniformes que permitan solucionar los diversos problemas que plantean los concursos con elementos extranjeros está planteada desde hace años. A esta necesidad responden, a nivel mundial, la *Ley Modelo sobre Insolvencia Transfronteriza* y la *Guía para su Incorporación al Derecho Interno* elaboradas por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) y aprobadas por Resolución 52/158 de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 15 de diciembre de 1997; y a nivel comunitario el Reglamento 1346/2000, sobre Procedimientos de Insolvencia, siquiera el mismo constituye sólo un primer paso en el proceso unificador en este ámbito.

En lo que a España se refiere, la incorporación de nuestro país al proceso uniformador comunitario hacía perentoria la modificación de nuestro sistema concursal, totalmente obsoleto, con dos procedimientos que habían quedado desnaturalizados: la quiebra y la suspensión de pagos.

La jurisprudencia había resaltado sus diferencias, pero también había señalado que “tales diferencias se atenúan en la realidad, pues, si de un lado,

para la declaración de quiebra parece suficiente que el comerciante haya cesado de forma general el pago de sus obligaciones (sin que se exija demostrar que se encuentra en verdadera situación de *insolvencia*, siendo posible, por tanto, la declaración de quiebra de un deudor solvente), por otro, la Ley de Suspensión de Pagos autoriza que se incluyan en la suspensión de pagos situaciones en las que el pasivo es superior al activo, calificadas por su normativa como de insolvencia definitiva” (STS 5 de julio de 1985). La consecuencia práctica fue la desnaturalización de la suspensión de pagos y la *fuga* hacia ella del empresario o comerciante en situación de crisis, que sólo parcialmente fue atajada por el Código Penal de 1995. En efecto, por un lado, al permitirse legalmente que el deudor pudiera lograr el convenio cuando su situación era de insolvencia definitiva, que era propia de la quiebra, sin las limitaciones que para alcanzar el convenio en ésta se preveían en la Ley, se potenciaba la finalidad de conservar el negocio o la empresa. Pero, por otro, al admitirse que la suspensión fuera abocada, incluso desde el principio (cfr. STS de 26 de noviembre de 1991, para la que la propuesta inicial de un convenio de liquidación es perfectamente lícita), a la liquidación, se conseguía el efecto contrario: la suspensión de pagos, con frecuencia, no tendía a lograr la conservación de la empresa, sino una liquidación sin sujeción a un procedimiento legal (a realizar por la *Comisión Liquidadora* nombrada en el convenio) y sin que se produjeran los riesgos que para el deudor entrañaba el procedimiento de quiebra (inhabilitación, calificación como fraudulenta y retroacción, fundamentalmente).

En estas condiciones el sistema concursal español se encontraba alejado de las tendencias de derecho comparado que se habían desarrollado en los países de la UE y, como he dicho, no encajaba en las tendencias a la unificación, hoy reflejadas en Reglamento 1346/2000. De aquí que la necesidad de la reforma, ansiada y reclamada desde hace tiempo, se impusiera como perentoria.

2. La reforma introducida por la Ley Concursal es radical, lo cual no obsta a que hayan sido incorporadas a la misma muchos de los materiales del sistema que se deroga. En las páginas que siguen analizaré alguna de las cuestiones procesales que me parecen relevantes.

1ª) El concurso es un procedimiento judicial para solucionar las situaciones de insolvencia y, por tanto, una institución procesal. Como he dicho al principio, el legislador ha judicializado el concurso –siguiendo la tradición jurídica española– y con ello ha dejado fuera de él situaciones de insolvencia o, al menos, de preinsolvencia que quizás podían resolverse al margen del proceso, a través de convenios extrajudiciales (con los acree-

dores más significativos o sólo con los financieros), que el texto legal ni siquiera menciona. La plena judicialización ha ido acompañada de la creación de unos órganos judiciales especializados, los Jueces de lo Mercantil, a los que se atribuye la competencia para conocer del concurso (art. 8 LC). La justificación de estos Jueces especializados de nueva planta se contiene en la Exposición de Motivos de la LORC, que se refiere a su creación como una: “necesidad incuestionada” de la que “se ha hecho eco expresamente el pacto de Estado para la reforma de la Justicia firmado el 28 de mayo de 2001” y se fundamenta en un doble propósito: “Por un parte, dar respuesta a la necesidad que plantea la nueva Ley que atribuye al Juez del concurso el conocimiento de materias pertenecientes a distintas disciplinas jurídicas y que, hasta el día de hoy, estaban asignadas a diferentes órdenes jurisdiccionales, lo que exige del titular del órgano jurisdiccional y del personal al servicio del mismo una preparación especializada. De otro lado, la complejidad de la realidad social y económica de nuestro tiempo y su repercusión en las diferentes ramas del ordenamiento aconseja avanzar decididamente en el proceso de especialización”. Consecuente con la especialización, la LORC la extiende también a la segunda instancia, previéndose la especialización de una o más Secciones dentro de las Audiencias Provinciales (art. 82.4 LOPJ reformado). Sin duda, mucho podríamos hablar de la especialización, pero de lo que no cabe duda es de que, como se ha dicho con razón (DÍEZ PICAZO-GIMENEZ), la necesidad de la misma a la que alude la Exposición de Motivos mencionada es perfectamente cuestionable y, además, ha sido cuestionada. Han sido muchas las voces, en efecto, que ya se han levantado contra ella rechazando la conveniencia de su introducción en nuestro ordenamiento concursal con argumentos de la más diversa naturaleza. Yo tengo que confesarles mi escepticismo. Estoy de acuerdo con que la especialización es de la ley y lo fundamental es la existencia de una instancia judicial unificadora de criterios, que –ésta sí– podría ser especializada. Téngase en cuenta, además, que a esos Juzgados se les atribuyen también competencias extraconcursoales, de acuerdo no “a directrices dogmáticas preestablecidas, sino a un contraste pragmático de las experiencias que han adelantado en nuestra práctica judicial este proceso de especialización que ahora se generaliza” (Exposición de Motivos de la LORC); es decir, la especialización que se pretende no se limita al ámbito concursal, sino que se extiende a otras materias susceptibles de ampliarse “de acuerdo con la experiencia que se vaya acumulando”, que puede desembocar en la asunción por estos órganos de todas las cuestiones mercantiles, con lo que se habría resucitado la vieja jurisdicción especial existente en España hasta el Decreto de unificación de fueros.

2ª) La opción legal por estos Juzgados especializados exigía delimitar sus competencias, partiendo el legislador, como decimos (con altas dosis de pragmatismo, una vez ejercitada la opción), “de unas bases iniciales prudentes que habrán de desarrollarse progresivamente en los años venideros, de acuerdo con la experiencia que se vaya acumulando” (Exposición de Motivos de la Ley Orgánica). El artículo 8 de la Ley Concursal, que reproduce el nuevo art. 86 ter, apartado primero, de la LOPJ, atribuye al Juez del concurso “la jurisdicción exclusiva y excluyente” sobre el conjunto de materias que menciona. La intención del legislador resulta clara: “El carácter universal del concurso justifica la concentración en un solo órgano judicial de las materias que se consideran de especial trascendencia para el patrimonio del deudor, lo que lleva a atribuir al Juez del concurso jurisdicción exclusiva y excluyente en materias como todas las ejecuciones y medidas cautelares que puedan adoptarse en relación con el patrimonio del concursado por cualesquiera órganos jurisdiccionales o administrativos, así como determinados asuntos que, en principio, son de la competencia de los Juzgados y Tribunales del orden social, pero que por incidir en la situación patrimonial del concursado y en aras de la unidad de procedimiento no deben resolverse por separado”. Sin embargo, no es correcta la técnica utilizada porque los Juzgados de lo Mercantil son órganos de la jurisdicción civil y el conjunto de competencias que se les atribuyen, por un lado amplían en sí el ámbito de su jurisdicción, sus trayéndola a los órganos de otras manifestaciones (social, contencioso-administrativa o penal), pero por otro, se limitan a reforzar su competencia objetiva, residenciando en ellos asuntos que, conforme a las normas generales, correspondería conocer y decidir a otros órganos de la misma jurisdicción civil.

La distinción no es sólo conceptual, sino que tiene importancia a la hora de delimitar los posibles conflictos que puedan plantearse, ya que mientras en el primer caso nos hallaríamos ante un conflicto entre tribunales de diferentes órdenes jurisdiccionales de la jurisdicción ordinaria (o de una jurisdicción especial; piénsese en las medidas cautelares que se adopten en el seno de la jurisdicción militar), que se resolverá aplicando las normas de control de oficio o a instancia de parte (cfr. arts. 37.2 y 39 LEC) o las reguladoras de los conflictos de competencia en la LOPJ (arts. 42 y ss.), en el segundo se tratará de una cuestión de competencia objetiva, para cuya solución nada se dice en la Ley procesal. Aunque la diferencia carecerá de relevancia práctica si se entiende que, para resolver estas posibles “cuestiones de competencia objetiva” debe acudir a lo dispuesto en el art. 46 LEC (aplicable analógicamente, ya que no se da identidad de

supuestos), que prevé la inhibición de oficio a favor de los tribunales competentes y si se plantea cuestión por esta causa, su tramitación por el cauce de las cuestiones de competencia de la LOPJ (arts. 42 y ss.).

3ª) El ámbito de la jurisdicción y de la competencia objetiva de los Jueces de lo Mercantil aparece fijado, con carácter general, en el art. 86 ter LOPJ cuyo apartado primero recoge las competencias “concursoales” en sentido estricto. Este precepto aparece reproducido literalmente en el art. 8 LC y responde a la idea antes apuntada de residenciar en el juez del concurso todos los conflictos que tengan trascendencia sobre el patrimonio del concursado.

La regla general es que el proceso concursal, en virtud de los principios de unidad y concentración que le son característicos, avoca a sí todas las reclamaciones patrimoniales a que estén afectos los bienes del concursado. En consecuencia, los Jueces ante quienes se interponga demanda con trascendencia patrimonial contra el concursado se abstendrán de conocer, previniendo a las partes que usen de su derecho ante el Juez del concurso (art. 50.1). La Ley garantiza este principio de una manera radical: “De admitirse a trámite las demandas, las actuaciones que se practiquen serán nulas de pleno derecho” (art. 50.1). Vistas las competencias “concursoales” que se atribuyen a los nuevos Juzgados, con su creación, dice la Exposición de Motivos de la Ley Orgánica, se lograrán diversos objetivos. “En primer lugar, que la totalidad de las materias que se susciten dentro de su jurisdicción sea resueltas por titulares con conocimiento específico de la materia, lo que facilitará unas resoluciones de calidad en un ámbito de indudable complejidad técnica. En segundo término, se contribuirá a que estas mismas resoluciones de dicten con mayor celeridad, pues ese mejor conocimiento del Juez en la materia se traducirá en una mayor agilidad en el estudio y resolución de los litigios. En tercero, se conseguirá más coherencia y unidad en la labor interpretativa de las normas, siendo posible alcanzar conclusiones más homogéneas, evitándose resoluciones contradictorias en un ámbito de indudable vocación europea, lo que generará una mayor seguridad jurídica (...)”. Por último, no se puede desconocer que esta división supondrá para la jurisdicción civil una notable descarga de trabajo, circunstancia que correlativamente “favorecerá el mejor desarrollo de las previsiones de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil”.

No obstante, a la vista de la delimitación de la jurisdicción y competencia del Juez del concurso, me parece que pueden plantearse problemas en la práctica. El concepto de “acciones civiles con trascendencia patrimonial que se dirijan contra el patrimonio del concursado”, que fija esta de-

limitación en el ámbito civil, no obstante la amplitud con que debe interpretarse, puede plantear dificultades a la hora de su precisa delimitación, con el posible riesgo de que surjan cuestiones de competencia (objetiva). Pero, en especial, el régimen establecido puede plantear problemas en los casos de acumulación de acciones, ya que, como decía anteriormente, el único supuesto que se contempla (introducido en el Senado) se refiere a la posible acumulación de las acciones tendentes a exigir responsabilidad civil a los administradores sociales, a los auditores o, en su caso, a los liquidadores, por los perjuicios causados al concursado durante el procedimiento (art. 8.1, 6º LC). La ausencia de una norma general que reconozca fuerza atractiva a la acción ejercitada contra el concursado impide la acumulación subjetiva de acciones (cfr. art. 72 LEC) cuando uno de los demandados sea el concursado, pudiendo plantear la situación especial gravedad en los supuestos de litisconsorcio pasivo necesario cuando, por razón de lo que sea objeto del juicio, la tutela jurisdiccional solicitada sólo pueda hacerse efectiva frente a varios sujetos (cfr. art. 12.2 LEC). Tampoco podrá el actor utilizar el expediente de la acumulación objetiva (art. 71.2 LEC) cuando una de las acciones no entre dentro de la competencia del Juez del concurso. Igualmente se cierra al concursado la posibilidad de plantear reconvención sobre cuestiones que no entran en el ámbito de la jurisdicción del juez del concurso, aunque la exigencia de conexión entre las acciones principal y acumulada que ahora exige la LEC (art. 406.1) atenuará este inconveniente. Los problemas son extensibles también a los supuestos de competencias “extraconcursales” del párrafo segundo del art. 86 ter LOPJ y pueden ser especialmente frecuentes, como antes apuntaba, cuando se ejercite la acción individual derivada de condiciones generales por vía de reconvención frente a una pretensión de cumplimiento de contrato planteada ante un juez diferente del concursal.

Dice el art. 50.2 LC que cuando una reclamación de tal naturaleza se haya presentado con posterioridad a la declaración del concurso ante un órgano de las jurisdicciones penal o contencioso-administrativa, la jurisdicción del Juez del concurso no se extiende a ella y, por lo tanto, no tiene operatividad el principio anterior. Sin embargo, en los correspondientes procesos se emplazará a la administración judicial y la tendrán como parte en defensa de la masa, si se personase (art.49.2). La exclusión de tales reclamaciones de la jurisdicción exclusiva y excluyente del Juez del concurso puede facilitar el fenómeno de la huida del proceso civil hacia estas otras jurisdicciones. Por ejemplo, en materia de responsabilidad patrimonial de la Administración, el art. 2, e) LJCA impone formular la reclamación ante los tribunales contencioso-administrativo incluso cuando a la

producción del daño haya concurrido con la Administración un sujeto particular (cfr. art. 9.4 LOPJ), por lo que bastará con demandar a ambos para que la reclamación frente a éste (el sujeto particular en situación concursal), de indudable contenido patrimonial, quede sustraída a la jurisdicción del Juez de lo Mercantil.

4^a) Desde la perspectiva del Derecho español, y a los efectos de la competencia para conocer de los procedimientos concursales, se distinguen dos tipos de concurso, cada uno de ellos con un alcance diferente: el concurso principal, cuando el deudor tenga en España el centro principal de sus intereses, y el concurso territorial, cuando tal centro se halle fuera de territorio español, pero el deudor tenga en éste un establecimiento.

A) En el primer caso, la competencia para declarar y tramitar el concurso se atribuye al Juez en cuya jurisdicción tenga el deudor dicho centro de sus intereses principales. Pero si el deudor tuviese además en España su domicilio y el lugar de éste no coincidiese con el centro de sus intereses principales, será también competente, a elección del acreedor solicitante, el Juez de lo Mercantil en cuya jurisdicción radique aquél (art. 10.1, I). En cualquier caso, “si se hubieran presentado solicitudes de declaración de concurso (por el deudor y un acreedor o ambas por acreedores) ante dos o más Juzgados competentes, será preferente aquél ante el que se hubiera presentado la primera solicitud” (art. 10.2). La norma que fija la preferencia podrá ser apreciada, de oficio o a instancia de parte, por el Juez del concurso incoado con posterioridad, tan pronto tenga conocimiento del procedimiento iniciado anteriormente. Se pretende así evitar, frustrando su planteamiento, la situación de dos procedimientos concursales pendientes ante órganos judiciales diferentes que, en la normativa anterior, encontraba su solución por la vía de la acumulación de procesos (cfr. STS de 15 de febrero de 1995, RJ 1995/843). La cuestión, que no tiene respuesta en la Ley, es determinar qué sucede cuando el conocimiento de la incoación de un concurso anterior tiene lugar en un estado avanzado de ambos procedimientos, porque no parece que la norma que establece la preferencia del procedimiento incoado primero pueda llevar consigo la frustración completa de las actuaciones llevadas a cabo en el otro. Tampoco se ofrece a la incoación simultánea de una pluralidad de concursos porque la Ley fija como único criterio de preferencia el temporal de la fecha de presentación de la solicitud.

La Ley atribuye a los efectos de este concurso alcance universal, “comprendiendo todos los bienes del deudor, estén situados dentro o fuera de España” (art. 9.1, III). Para el caso de que se abra también un procedi-

miento de insolvencia (territorial) en el extranjero, la Ley se remite a las reglas de coordinación previstas en el Capítulo III del Título IX.

B) En el caso de *concurso territorial*, la competencia se atribuye al Juez de lo Mercantil de la capital de la provincia o de la ciudad autónoma donde radique el establecimiento abierto en territorio español y, de existir varios, donde radique cualquiera de ellos, a elección del solicitante (art. 10.3, I). La Ley limita el alcance de los efectos de este concurso territorial a los bienes del deudor, afectos o no a su actividad, que estén situados en España, aplicándose también las reglas de coordinación previstas en la Ley en el caso de que se abra un procedimiento de insolvencia (principal) en el país donde el deudor tenga el centro de sus intereses principales.

En el procedimiento concursal el Juez examinará de oficio su competencia y determinará si ésta se basa en el apartado 1 (concurso principal) o en el apartado 3 (concurso territorial) del art. 10. En su defecto, y como en cualquier otro procedimiento, en el concurso pueden plantearse cuestiones de competencia territorial por medio de declinatoria (art. 12 LC). Téngase presente que (después de la última reforma introducida por el Senado) el precepto se limita a las cuestiones de competencia territorial, con exclusión, por tanto, de las que puedan plantearse en el ámbito de la competencia judicial internacional, que en el régimen general de la LEC encuentran su solución también a través del cauce de la declinatoria (art. 39 LEC). La razón hay que buscarla en que la Ley Concursal ha acogido el criterio del Reglamento 1346/2000, de Procedimientos de Insolvencia que nada se dice sobre la posibilidad de discutir la competencia, limitándose en su *considerando* 22 a apelar, para la solución de este problema (y de otros), al “*principio de confianza mutua*”, “conforme al cual debería solventarse cualquier conflicto que se produzca cuando los tribunales de dos Estados miembros se consideren competentes para incoar un procedimiento principal de insolvencia”. Según este principio, “la decisión del tribunal que lo incoe en primer lugar debería ser reconocida en los demás Estados miembros, que no estarán autorizados a someter a control la decisión de dicho tribunal”.

En los supuestos de concurso necesario el planteamiento de la declinatoria por el deudor se ve facilitado por el carácter contradictorio que reviste su declaración en el sistema instaurado por la Ley Concursal: podrá hacerlo dentro de los cinco días siguientes a aquél en que se le hubiere emplazado para formular oposición. También podrán plantear la declinatoria (tanto en el concurso voluntario como en el necesario) los demás legitimados para solicitar la declaración de concurso, en el plazo de diez

días desde la última de las publicaciones del auto de declaración que se ordenan en el art. 23.1 (art. 12.1).

La previsión del control de oficio excluye la sumisión pactada entre el deudor y todos los acreedores con anterioridad a la declaración judicial de concurso, admitida por algunos autores para la quiebra anterior. Sin embargo, en defecto de control de oficio por parte del Juez o a instancia de los legitimados para plantear la declinatoria, parece que será posible la sumisión tácita, ya admitida por la jurisprudencia anterior para la quiebra (cfr. SSTs 29 septiembre 1922 y 11 noviembre 1929) y que se vincula por la Ley al no planteamiento de una cuestión de competencia cuando el concurso se instó ante un Juez legalmente incompetente. La alternativa, en efecto, sería admitir la posibilidad de plantear un incidente de nulidad de actuaciones cuando la falta de competencia sea apreciada con posterioridad, lo cual está excluido porque tanto la LOPJ como la LEC no consideran nulas las actuaciones realizadas con falta de competencia territorial.

El promotor de la declinatoria deberá (“estará obligado”, dice la Ley) indicar, en el escrito correspondiente, cuál es el órgano competente para conocer del asunto (art. 12.2). Esta norma (introducida por el Senado) tiene sentido cuando la competencia territorial no venga determinada por normas imperativas porque, en tal caso, el Juez, para estimar la declinatoria, “habrá de considerar competente al órgano señalado por el promotor de la declinatoria” (art. 65.4 LEC). En cambio, no se entiende su sentido en el proceso concursal, en el que las normas de competencia territorial son imperativas; la Ley establece el control de oficio y, en consecuencia, la desvinculación del Juez del criterio sobre competencia mantenido por el promotor de la declinatoria.

A diferencia de lo que ocurre en el proceso civil general (cfr. art. 64 LEC), la interposición de la declinatoria no tiene efectos suspensivos del procedimiento concursal, aunque en ningún caso podrá pronunciarse el Juez sobre la oposición del concursado sin haber resuelto la cuestión de competencia planteada, previa audiencia del Ministerio Fiscal (art. 12.2). En caso de que estime la cuestión de competencia –continúa el precepto, reproduciendo de manera innecesaria el art. 65.5 LEC–, el Juez deberá inhibirse a favor del órgano al que corresponda la competencia, con emplazamiento de las partes y remisión de lo actuado; en cualquier caso, la resolución estimatoria no obsta a la validez de todo lo actuado (art. 12.3).

5ª) La Ley Concursal se asienta, entre otros principios, en el de unidad de procedimiento. No sólo la satisfacción de los acreedores, que es

la finalidad fundamental de la Ley, sino muchas veces también el interés público exigen rapidez en la solución de las situaciones de crisis. En palabras de la Exposición de Motivos, uno de los objetivos perseguidos es el de reconducir la complejidad del concurso a un procedimiento que permita su más pronta, eficaz y económica tramitación. Y este objetivo se pretende conseguir por las siguientes vías:

A) En primer lugar, por medio de la concentración en el juez del concurso de la jurisdicción “exclusiva y excluyente” para resolver los procesos que, perteneciendo al ámbito de su decisión (cfr. art. 8 LC y nuevo art. 86 ter LOPJ), se planteen en el curso del procedimiento. Se opta, pues, por la opción –aunque limitada– por la unidad jurisdiccional de todos los aspectos implicados en el concurso: “El carácter universal del concurso –dice la Exposición de Motivos– justifica la concentración en un solo órgano jurisdiccional del conocimiento de todas estas materias, cuya dispersión quebrantaría la necesaria unidad procedimental y de decisión”.

B) En segundo lugar, la también concentración de la resolución de todas las cuestiones que se planteen en el curso del concurso en un único procedimiento, el llamado incidente concursal, común o laboral. Según el art. 192.1, este incidente es el cauce procesal previsto para la tramitación de cualesquiera cuestiones que se susciten en el curso del procedimiento y no tengan señalada por la Ley otra tramitación

C) En tercer lugar, a través de un conjunto de normas que tienen por finalidad específica evitar la suspensión del procedimiento concursal y agilizar su tramitación. La finalidad de evitar la suspensión se trata de alcanzar con el carácter no suspensivo de los incidentes que se planteen, sin perjuicio de que el Juez, de oficio o a instancia de parte y de forma excepcional, acuerde la suspensión de aquellas actuaciones que estime puedan verse afectadas por la resolución que se dicte (arts. 186.2, con carácter general, y 192.2, sobre el carácter no suspensivo del incidente concursal). A reforzar esta finalidad van encaminadas también la no suspensión del procedimiento por prejudicialidad penal (art. 189.1) y la privación de efectos suspensivos a la declinatoria (art. 12).

D) Medidas agilizadoras, sin duda, pero en las que no debo entrar aquí, son la regulación de la propuesta anticipada de convenio, que permite la conclusión del procedimiento sin que éste haya superado la fase común, y la previsión del procedimiento abreviado (arts. 190–191), que se configura sobre la base del ordinario con estas dos únicas especialidades: la reducción de los plazos a la mitad y la limitación a uno de los componentes de la administración judicial.

E) Y, por último, también la supresión de determinados recursos y la privación (con carácter general) del carácter suspensivo al recurso de apelación.

Aun con estas medidas, sin duda la Ley Concursal no regula un procedimiento corto y sencillo que permita efectivamente la recuperación de las empresas en los casos en que sea objetivamente viable, sino que, de acuerdo con la finalidad de satisfacción de los acreedores, que es la prioritaria, contiene un procedimiento de ejecución universal forzosa clásico y tradicional. La cuestión, como ha resaltado el Prof. ROJO, es si esta tramitación es compatible con la rapidez que, en la sociedad contemporánea, exige el tratamiento jurídico de las crisis. En su opinión la respuesta que debe darse a esa cuestión es negativa. Frente al modelo proyectado –dícese necesita que el procedimiento sea más rápido, más ágil y, en definitiva, más eficaz, y no parece que este objetivo se haya alcanzado tampoco con las últimas reformas.

6ª) Mención concreta requiere también el sistema de recursos que se instaure y que ahora, después de la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, debe considerarse completado con los previstos contra las resoluciones del Secretario Judicial (cfr. art. 197.1 LC), tema en el que no me detendré. En lo general, el art. 197 LC incorpora el sistema de recursos de la LEC, con las modificaciones que regula, entre las que, sin duda, la más importante es el desdoblamiento que supone la apertura de los recursos previstos en la Ley de Procedimiento Laboral cuando se trate de resoluciones dictadas en asuntos de esta naturaleza. Las líneas maestras de este sistema son las siguientes:

A) El mantenimiento del sistema de la LEC en materia de recursos frente a providencias y autos (art. 197.2). Como ocurre en la ley procesal común (cfr. art. 451), el recurso previsto con carácter general es el de reposición, pero es posible que la ley prevea otro distinto (apelación: cfr. art. 455.1 LEC) o que no prevea ninguno, porque el derecho a los recursos, como manifestación del derecho a obtener la tutela judicial efectiva, agota su contenido en la utilización de los recursos previstos en la ley (cfr. art. 448.1 LEC), sin que forme parte del mismo el derecho a que por la ley se prevea uno determinado.

También como sucede en el régimen general (cfr. art. 454 LEC), frente a auto resolutorio de la reposición no cabe recurso alguno (en concreto el de apelación). Esta privación del recurso de apelación se da también respecto de las sentencias dictadas en incidentes concursales promovidos en la fase común o en la de convenio, aunque “las partes podrán reproducir

la cuestión en la apelación más próxima, siempre que hubieren formulado protesta en el plazo de cinco días” (art. 197.3). Resulta, sin duda, encomiable el deseo del legislador de dotar de seriedad al ejercicio de esta facultad que se reconoce a las partes perjudicadas por la sentencia directamente irrecurrible y de evitar así la posible avalancha de recursos cuando se plantee la primera apelación contra sentencia recurrible. La cuestión es determinar cuándo se formula la protesta. Puesto que la misma se presenta contra la resolución que pone fin al incidente, habrá que pensar que debe presentarse una vez notificada la sentencia mediante escrito *ad hoc* o por comparecencia ante el Juzgado en el plazo de cinco días que señala el precepto.

Se consigue así la simplificación y concentración de las apelaciones, anunciada por el Ministerio de Justicia, y con ello la agilización del procedimiento: “una de las modificaciones del sistema procesal de recursos está en la concentración que se propone para las apelaciones, que se simplifican de manera importante, sin reducción de garantías. Concretamente se trata de lograr que la Audiencia Provincial no se vea sometida a la tarea de resolver una pluralidad de recursos inconexos y parciales durante años de tramitación del concurso, que es lo que ahora ocurre, y que en su lugar puedan revisar lo actuado en el Juzgado por fases completas y con la necesaria visión de conjunto para poder contribuir a perfeccionar la respuesta jurisdiccional en esta clase de procesos”.

B) Contra las sentencias que aprueben el convenio, o las que resuelvan incidentes concursales planteados con posterioridad o durante la fase de liquidación cabrá recurso de apelación que se tramitará con carácter preferente, y en la forma prevista para las apelaciones de sentencias dictadas en juicio ordinario (art. 197.4). Previsión esta última en la que sigue insistiendo el legislador, a pesar de que la LEC/2000 ha unificado la tramitación del recurso de apelación, sin que proceda, por tanto, hacer distinción alguna cuando el mismo se interponga contra sentencias dictadas en el juicio ordinario.

Este recurso de apelación no tiene efectos suspensivos, aunque el juez, de oficio o a instancia de la parte recurrente, puede acordar motivadamente al admitir el recurso de apelación la suspensión de aquellas actuaciones que puedan verse afectadas por su resolución (art. 197.5). No obstante, su decisión podrá ser revisada por la Audiencia Provincial a solicitud de parte formulada en el escrito de interposición de la apelación u oposición a la misma, en cuyo caso esta cuestión habrá de ser resuelta con carácter previo al examen del fondo del recurso y dentro de los diez días siguientes

a la recepción de los autos por el Tribunal, sin que contra el auto que se dicte pueda interponerse recurso alguno.

C) Importante novedad es la previsión del recurso de suplicación y los demás recursos previstos en la LPL, cuando la sentencia resuelva incidentes relativos a acciones sociales cuya competencia corresponda al juez del concurso, a los que se priva también, y sin excepción, del efecto suspensivo. A tal fin se introducen las correspondientes modificaciones en la LOPJ, atribuyendo la competencia funcional para conocer de los mismos a las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia (art. 75.2).

Habrà que estar obviamente al àmbito de la jurisdicción en esta materia previsto en el art. 8 (“acciones sociales que tengan por objeto la extinción, modificación o suspensión colectivas de los contratos de trabajo en los que sea empleador el concursado, así como la suspensión o extinción de los contratos de alta dirección, sin perjuicio de que cuando estas medidas supongan modificar las condiciones establecidas en convenio colectivo aplicable a estos contratos se requerirá el acuerdo de los representantes de los trabajadores”), a las que hay que añadir las acciones que los trabajadores puedan ejercer contra el auto que ponga fin a los expedientes de modificación, suspensión o extinción colectiva de las relaciones laborales en cuestiones que se refieran estrictamente a la relación jurídica individual, que se sustanciarán por el incidente concursal, ahora el laboral del 195, y la sentencia que recaiga será recurrible en suplicación (art. 64.8, II). Para la primera de estas materias (los expedientes de modificación, suspensión o extinción colectiva de las relaciones laborales) la posibilidad de interponer estos recursos contra el auto que pone fin al procedimiento ya estaba prevista en el art. 64.8, I.

En todo caso, en el enjuiciamiento de estas materias, y sin perjuicio de la aplicación de las normas específicas de la Ley Concursal, deberán tenerse en cuenta (también por los Jueces concursales en primera instancia) los principios inspiradores de la ordenación normativa estatutaria y del procedimiento laboral (art. 8, 2º).

D) Por último, la admisión de recursos extraordinarios: cabrà el recurso de casación o el extraordinario por infracción procesal contra las sentencias dictadas por las Audiencias relativas a la aprobación o cumplimiento del convenio, a la calificación o conclusión del concurso, o que resuelvan acciones de las comprendidas en las secciones tercera (acciones de reintegración y de reducción) o cuarta (acciones relativas a la existencia, legitimidad y circunstancias de los créditos) (art. 197.6).

La apertura de estas sentencias a la casación (y en general a los recursos extraordinarios) supone una innovación frente al sistema precedente de la quiebra, en el que, en la generalidad de los asuntos, se cerraba su acceso a casación: “en cuanto conjunto de actuaciones de un orden de proceder que comprende varios aspectos desarrollados en piezas, carecen de acceso a la casación” (STS 31 enero 1995, RJ 414), ya que “es jurisprudencia reiterada de esta Sala, plenamente consolidada desde 1992, que ni siquiera contra la resolución que ponga fin a la pieza principal o esencial de dicho procedimiento cabe recurso de casación, (STS 12 mayo 1998, RJ 4347); y tampoco en materia de calificación (ahora expresamente prevista), sobre la que existe “un cuerpo de doctrina abundante, y reiterada por esta Sala desde hace algunos años, que rechaza la admisión de las impugnaciones casacionales de las resoluciones recaídas en los incidentes tramitados en la pieza quinta sobre la calificación de la quiebra” (STS 12 noviembre 1993, RJ 8763).

Esta apertura a los recursos extraordinarios se realiza “conforme a los criterios de admisión previstos en la LEC”. No por tanto *ratione materiae* en la generalidad de los casos, por lo que parece que si la sentencia en un concreto caso (por ejemplo, la dictada en un incidente en que se ejercita una acción rescisoria) no supera la cuantía legalmente exigida (art. 477.2, 2º LEC), no procederá la apertura de la casación. En consecuencia, en relación con tales criterios de admisión del recurso de casación habrá que tener en cuenta la doctrina restrictiva que viene establecida por el Tribunal Supremo cuando se invoca el interés casacional como fundamento del recurso, al decir que “los cauces contemplados en el art. 477.2 son distintos e incompatibles, siendo importante insistir y resaltar que la vía del interés casacional está reservada a los asuntos seguidos en atención a la materia que constituye el objeto del litigio” (ATS 5 marzo 2002, JUR 2002\89893).

En cualquier caso, la delimitación entre los recursos extraordinarios, cuando se trate de cuestiones civiles, vendrá determinada por los motivos fundadores (arts. 469 y 477.1 LEC), siendo acumulables ambos conforme al régimen transitorio previsto en la Disposición Final 16ª LEC.

7ª) Situados dentro del procedimiento y partiendo de que su finalidad fundamental –constantemente reiterada– es la satisfacción de los acreedores de una manera ordenada con el patrimonio del deudor común, la eficacia del instrumento concursal que se diseña en la Ley se supedita a la correcta regulación de algunas cuestiones fundamentales. Entre ellas la del presupuesto objetivo, cuya regulación debe ser adecuada para llegar

a tiempo de evitar que la situación económica del deudor sea tal que el concurso sea inútil para satisfacer a los acreedores. La ley cifra este presupuesto en la insolvencia que se concibe como el estado patrimonial del deudor que no puede cumplir regular y puntualmente sus obligaciones. No prescinde, por tanto, de la suficiencia o insuficiencia del patrimonio del deudor para atender al cumplimiento de sus obligaciones. Pero como el conocimiento de esta situación varía según inste el concurso el deudor o los acreedores, el juego de este presupuesto es diferente en el concurso voluntario y en el necesario.

Si la solicitud de declaración de concurso la presenta el deudor, deberá expresar si su estado de insolvencia es actual o si la prevé como inminente y acompañará, entre otros documentos, un inventario y valoración de sus bienes y derechos y la relación de sus acreedores (art. 5); es decir, deberá aportar los datos (que él conoce) de los que se deduce su situación de insolvencia.

Cuando la solicitud de declaración de concurso la presenta un acreedor, el legislador parte de que desconoce la situación económica del deudor, por lo que le faculta para instarlo con base en unos hechos externos que hacen sospechar que la empresa –el deudor– va mal y puede encontrarse en situación de insolvencia (art. 2.4). Pero su declaración exige la previa audiencia del deudor, que podrá basar su oposición tanto en la inexistencia del hecho (presuntamente revelador de la insolvencia) en que se fundamenta la solicitud como en que, aun existiendo, no se encuentra en real estado de insolvencia (art. 17.2).

El sistema legal combina así las garantías del deudor con la conveniencia de adelantar en el tiempo la declaración de concurso a fin de evitar que el deterioro del estado patrimonial impida o dificulte las soluciones más adecuadas para satisfacer a los acreedores. Pero esta finalidad quizás se ha conseguido en el voluntario con los estímulos a la solicitud del deudor (convenio anticipado) y, sobre todo, con el establecimiento del deber de presentar la solicitud (art. 5) y las sanciones a su incumplimiento (prohibición de propuesta anticipada, presunción de dolo o culpa grave a los efectos de calificar el concurso como culpable, etc.). No, en cambio, en el necesario, en el que el único estímulo al acreedor instantáneo es el reconocimiento a su crédito de privilegio general hasta la cuarta parte.

La satisfacción de los acreedores del deudor común responde a los principios de universalidad y de proporcionalidad: la finalidad del concurso es sujetar todo el caudal y masa de acreedores a un proceso conjunto universal donde pueda lograrse la efectividad de los distintos créditos

de un modo proporcional y equitativo, sin otra preferencia que aquélla que la ley expresamente reconozca.

La consecución de este objetivo esencial perseguido con el concurso exige:

a) Por un lado, adoptar medidas para garantizar la universalidad de la masa activa. La Ley Concursal: 1) define este principio (art. 76); 2) modifica el sistema de reintegración, poniendo fin a la retroacción absoluta y sustituyéndola por un sistema de acciones de reintegración destinadas a rescindir los actos perjudiciales para la masa activa, perjuicio que en unos casos la Ley presume y en los demás habrá de probarse por la administración judicial o, en su caso, por los acreedores legitimados, y completándolo con la finalidad reintegradora de la responsabilidad de administradores; 3) racionaliza el sistema de separación *ex iure dominii* (desaparición de las acciones reivindicatorias impropias), y limita la separación *ex iure crediti* (ejecución separada).

b) Por otro, privar a los acreedores del deudor común de las iniciativas procesales para la tutela de sus derechos que a cada uno, individualmente, le corresponden, paralizando sus acciones aisladas (ejecuciones) y sustituyéndolas por una conjunta. Más adelante me refiero a ello.

c) Por último, garantizando que todos los acreedores están dentro del concurso (con las escasas excepciones que se prevén). Sin duda, la “piedra de toque” de cualquier sistema concursal es el tratamiento de los créditos privilegiados: su supresión –y tratamiento igual de todos los créditos–, que garantizaría una *par conditio creditorum* efectiva, es una utopía; pero no, en cambio, su reducción, que es lo que acomete la Ley Concursal. La Ley ha introducido importantes innovaciones en la materia de clasificación de los créditos, reduciendo “drásticamente los privilegios y preferencias a efectos del concurso, sin perjuicio de que puedan subsistir en ejecuciones singulares, por virtud de las tercerías de mejor derecho. Se considera que el principio de igualdad de tratamiento de los acreedores ha de constituir la regla general del concurso, y que sus excepciones han de ser muy contadas y siempre justificadas” (cfr. La Exposición de Motivos), sin que se considere suficiente la naturaleza de interés público o social en que se ampara el privilegio, porque el resultado a que ha dado lugar –en el sistema actualmente vigente– ha sido impedir la continuación de la empresa y vaciar la masa activa, sacrificando el derecho de los acreedores no comunes. Sin embargo, hay que decir que no se han cumplido todas las expectativas en este ámbito, en especial por el mantenimiento como privilegiados de los créditos de derecho público.

8ª) Acabo de decir que la satisfacción de los acreedores del deudor común responde a los principios de universalidad y de proporcionalidad: la finalidad del concurso es, como había declarado reiteradamente la jurisprudencia respecto del anterior juicio de quiebra, sujetar todo el caudal y masa de acreedores a un proceso conjunto universal donde pueda lograrse la efectividad de los distintos créditos de un modo proporcional y equitativo, sin otra preferencia que aquélla que la ley expresamente reconozca. Para la consecución de esta finalidad se prevén dos soluciones, el convenio y la liquidación, ambas articuladas como fases de un único procedimiento: la satisfacción de todos los acreedores (principio de universalidad de la masa pasiva) se consigue, dentro del concurso, en la forma que resulte del convenio que se apruebe o hasta donde alcance la cantidad líquida obtenida con la realización (liquidación) de los bienes que integran el patrimonio del deudor afectado, que queda delimitado también conforme al principio de universalidad (cfr. art. 76 LC). Que la Ley prime el convenio sobre la liquidación con un conjunto de medidas y que a través de aquél (cuando su contenido sea la continuación de la actividad) pueda cumplirse una finalidad conservativa de la empresa, no obsta a que, como decimos, la finalidad fundamental perseguida sea la satisfacción de los acreedores ni tampoco, me parece, a la naturaleza ejecutiva de la institución concursal, aunque, sin duda, la misma destaca más cuando la solución alcanzada sea la liquidación.

En cualquier caso, este objetivo esencial perseguido con el concurso no sería posible alcanzarlo sin privar a los acreedores del deudor común de las iniciativas procesales para la tutela de sus derechos que a cada uno, individualmente, le corresponden, paralizando sus acciones aisladas y sustituyéndolas por una conjunta. Por eso, efecto fundamental de la declaración de concurso es la constitución de la llamada “masa de acreedores” o “masa pasiva” del concurso que, como decía anteriormente, responde (igual que la activa) al principio de universalidad: “una vez declarado el concurso, todos los acreedores del deudor, ordinarios o no, cualesquiera que sean su nacionalidad y domicilio, quedarán de derecho integrados en la masa pasiva del concurso, sin más excepciones que las establecidas en las leyes” (art. 49 LC), entre las que se encuentran, como veremos, los créditos contra la masa (cfr. art. 84.1 LC); y los mecanismos para la operatividad práctica de esta integración son la comunicación de créditos (cfr. art. 85) y su reconocimiento por la administración concursal (arts. 86 y 87), del que sólo están excluidos (“se incluirán necesariamente” en la masa pasiva) los previstos en el art. 86.2 (los reconocidos por laudo o por sentencia, aunque no sean firmes, los que consten en documento con fuerza

ejecutiva, los reconocidos por certificación administrativa, los asegurados con garantía real inscrita y los créditos de los trabajadores cuya existencia y cuantía resulten de los libros y documentos del deudor o por cualquier otra razón consten en el concurso; ello sin perjuicio de la facultad para impugnar su legitimidad que se reconoce a la administración concursal).

No obstante, deben introducirse dos precisiones a este principio general. Por un lado, el efecto paralizador de las acciones individuales sólo se produce en la fase de ejecución, porque, como había dicho la jurisprudencia anterior (interpretando el art. 9, IV LSP, cuyo tenor literal, por lo demás, era claro), la finalidad que se pretende alcanzar con el concurso exige “la paralización de las acciones individuales, pero solamente en su fase de ejecución, que es de lo que estará privado el actor hasta que finiquite el expediente”, porque la igualdad de posición jurídica de los acreedores “hay que referirla a la agresividad patrimonial del momento propiamente ejecutivo y de satisfacción del crédito al ejecutante, momento en el que ha de quedar ya sometido a la disciplina común impuesta en el expediente (en el caso, de suspensión de pagos)”. La consecuencia es que, como vamos a ver, ningún obstáculo existe para la iniciación de juicios declarativos contra el deudor después de la declaración de concurso, ni tampoco para la continuación de los procesos (y de los procedimientos arbitrales) que en ese momento se encuentren pendientes ante juez diferente, que proseguirán su tramitación hasta la firmeza de la sentencia (o del laudo), sin perjuicio de su posible acumulación al concurso (de los procesos, no de los procedimientos arbitrales) en los términos que serán expuestos más adelante.

Por otro, la integración de la masa pasiva no es absoluta, porque subsisten en el nuevo sistema supuestos de ejecución separada (*separatio ex iure crediti*) previstos en las leyes. La Ley Concursal (art. 49) se refiere a ellos, cuando alude a las excepciones previstas en las leyes, y más adelante serán analizados al tratar de los efectos de la declaración de concurso sobre las ejecuciones y apremios. Baste ahora con resaltar que la Ley Concursal ha introducido en esta materia importantes innovaciones, reduciendo los supuestos (o limitando su alcance) en que operaba este privilegio en el sistema que se deroga.

En cualquier caso, resulta claro que el carácter privilegiado de un crédito no fundamenta nunca, salvo las excepciones legalmente previstas, el derecho de ejecución separada. En la Ley Concursal estos créditos (privilegiados) que, como decía antes, ven reducido su número y, en algunos casos, su alcance (como ocurre con los tributarios y demás de Derecho público, así como con los de la Seguridad Social: cfr. art. 91, 4º), se satisfacen den-

tro del procedimiento concursal, aunque, en principio, el convenio sólo les afecta con su conformidad y, en caso de que la solución adoptada haya sido la liquidación, se les pagará con prioridad respecto de los créditos ordinarios. Lo mismo ocurría, a pesar de la opinión en contra mantenida por un sector de la doctrina, con los créditos con derecho de abstención en la suspensión de pagos anterior. La distinción, dentro de ella, entre el privilegio de ejecución separada y el derecho de abstención reconocido a los créditos privilegiados había sido precisado con claridad por la jurisprudencia: el derecho que atribuye el artículo 15 LSP a ciertos acreedores para abstenerse de concurrir a la Junta tiene la consecuencia de que si no asisten tampoco quedan obligados por sus acuerdos, pero, salvo que se trate de acreedores hipotecarios o pignoratícios o asimilados (que tenían reconocido el derecho de ejecución separada), no les autoriza para realizar su crédito al margen de la suspensión, aunque sin perjuicio de la preferencia que al mismo corresponda, no afectado por los términos del convenio que pueda celebrarse.

La Ley Concursal regula esta materia en el Título III, Capítulo II (arts. 49 y ss.), en palabras de la Exposición de Motivos con criterios de gran funcionalidad, partiendo en lo fundamental de la regulación anterior, aunque introduciendo importantes innovaciones. Un esquema general de la regulación sería el siguiente:

La declaración de concurso no obsta a que puedan iniciarse, en las condiciones y por el procedimiento que luego veremos, juicios declarativos contra el deudor (art. 50). En cambio, los convenios arbitrales en que aquél sea parte quedan sin valor ni efecto durante la tramitación del concurso (art. 52.1), por lo que, durante la pendencia del mismo, no podrán iniciarse procedimientos de esta naturaleza frente al deudor ni tampoco por éste frente a terceros.

Los procesos declarativos y los procedimientos arbitrales seguidos contra el deudor que se encuentren pendientes en el momento de dictarse el auto de declaración de concurso continuarán hasta la firmeza de la sentencia o del laudo respectivamente (arts. 51 y 52.2) ante el órgano (judicial o arbitral) que esté conociendo de ellos. Sin embargo, en los supuestos que veremos, se prevé la posibilidad de acumular al concurso los procesos judiciales, pero no los procedimientos arbitrales. La producción de este efecto plantea el problema de la posición del deudor en los procesos o procedimientos arbitrales pendientes, que la Ley Concursal resuelve de forma diferente según que el régimen decretado haya sido el de suspensión de sus facultades de administración y disposición o sólo el de intervención.

Ningún obstáculo existe tampoco para que con posterioridad a la declaración de concurso puedan ejercitarse las acciones de que sea titular el concursado (art. 54). La Ley Concursal (art. 54.1) distingue según se trate de acciones de índole personal o patrimonial, sometiendo las segundas (y los efectos de contenido económico de las primeras) a las consecuencias respecto de la legitimación que derivan del régimen de intervención o sustitución de las facultades del deudor que se haya decretado, aunque prevé la posibilidad de personación y defensa separada del deudor en los procesos promovidos por la administración concursal (art. 54.3) y reconoce legitimación subsidiaria a los acreedores para su ejercicio (art. 54.4).

Se cierra el paso a la posibilidad de iniciar ejecuciones singulares (judiciales o extrajudiciales) y apremios administrativos o tributarios contra el patrimonio del concursado (art. 55.1) después de declarado el concurso y se ordena la suspensión de las que se encuentren pendientes en ese momento, sin perjuicio del tratamiento concursal que corresponda dar a los respectivos créditos. Aunque esta norma tiene dos excepciones: los supuestos de ejecución separada legalmente previstos y los procedimientos administrativos y laborales de ejecución en los que, respectivamente, se hubiese dictado providencia de apremio o se hubieran embargado bienes al concursado con anterioridad a la fecha de declaración de concurso que podrán continuar. De este régimen se exceptúan los procedimientos de ejecución de garantías reales, en los que se mantiene el derecho a la ejecución separada, aunque sometido a determinadas condiciones y límites, objetivos y temporales (arts. 55.4 y 56 y ss.).